



## Asamblea General

Distr.  
GENERAL

A/42/915  
10 de febrero de 1988  
ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

Cuadragésimo segundo período de sesiones  
Tema 136 del programa

### INFORME DEL COMITE DE RELACIONES CON EL PAIS HUESPED

#### Informe del Secretario General

1. En su resolución 42/210 B, de 17 de diciembre de 1987, la Asamblea General, habiendo sido informada de la medida que estaba estudiando el país huésped, los Estados Unidos de América, que podría dificultar que la Misión Permanente de Observación de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) ante las Naciones Unidas tuviera locales en Nueva York, indispensables para el desempeño de sus funciones oficiales, pidió al Secretario General que tomara las medidas apropiadas para asegurar el pleno respeto del Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede, de 26 de junio de 1947 <sup>1/</sup>, e informara a la Asamblea General sin demora de cualquier hecho nuevo que se produjera al respecto.
2. La medida del país huésped examinada por la Asamblea General en su resolución 42/210 B fue llevada a la práctica con la promulgación, por el Presidente de los Estados Unidos, el 22 de diciembre de 1987, de la Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989, cuyo Título X, la Ley de Antiterrorismo de 1987, estableció ciertas prohibiciones respecto de la OLP, entre otras, la prohibición de "establecer o mantener una oficina, una sede u otros establecimientos o instalaciones en la jurisdicción de los Estados Unidos bajo la dirección de la OLP o a pedido de ella o con fondos suministrados por la OLP o cualquiera de sus grupos constitutivos, cualquier sucesor de la OLP o de cualquiera de dichos grupos o cualesquiera de sus agentes".
3. Adelantándose a la aprobación de esta Ley por el Congreso de los Estados Unidos, el Secretario General dirigió dos cartas al Representante Permanente de los Estados Unidos, el Embajador Walters. En la primera de ellas, de fecha 7 de diciembre de 1987, el Secretario General reiteró al Representante Permanente la opinión expresada previamente por las Naciones Unidas de que los miembros de la

<sup>1/</sup> Resolución 169 (II).

Misión de Observación de la OLP son, en virtud de la resolución 3237 (XXIX), invitados de las Naciones Unidas y que, en virtud del Acuerdo relativo a la Sede, los Estados Unidos tienen la obligación de permitir al personal de la OLP entrar y permanecer en los Estados Unidos para desempeñar sus funciones oficiales en la Sede de las Naciones Unidas. Por consiguiente, los Estados Unidos tenían la obligación jurídica de mantener los arreglos existentes para la Misión de Observación de la OLP, que estaban en vigor desde hacía unos 13 años. El Secretario General expresó la esperanza de que el Gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con su propia posición jurídica, pudiera actuar para prevenir la aprobación de la legislación; en reiteradas ocasiones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había asumido la posición de que los Estados Unidos tenían la "obligación de permitir al personal de la Misión de Observación de la OLP entrar y permanecer en los Estados Unidos para desempeñar sus funciones oficiales". No obstante, en caso de que se promulgara la legislación propuesta, el Secretario General procuró asegurarse de que los arreglos existentes para la Misión de Observación de la OLP no se vieran menoscabados o afectados de otra manera. En la segunda carta, de fecha 21 de diciembre de 1987, el Secretario General informó al Representante Permanente de la aprobación por la Asamblea General de la resolución 42/210 B y solicitó que se le informara de cualquier otra novedad respecto de la legislación pendiente, especialmente si se promulgaba.

4. El 5 de enero de 1988, el Representante Permanente interino de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Embajador Herbert Okun, respondió a las cartas del Secretario General del 7 y 21 de diciembre de 1987 y confirmó que la Ley había sido firmada por el Presidente Reagan el 22 de diciembre de 1987 y que la Sección relativa a la OLP entraría en vigor 90 días después. La carta decía además que, "dado que las disposiciones relativas a la Misión de Observación de la OLP podrían entrar en conflicto con las atribuciones constitucionales del Presidente y, de aplicarse, contravendrían nuestras obligaciones jurídicas internacionales en virtud del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas, el Gobierno se propone, durante el lapso de 90 días anterior a la entrada en vigor de esta disposición, iniciar consultas con el Congreso con miras a resolver este asunto".

5. El 14 de enero de 1988 el Secretario General escribió nuevamente al Embajador Walters. Tras manifestar su satisfacción por la intención expresada en su carta por el Embajador Okun de utilizar el período de 90 días para entablar consultas con el Congreso, el Secretario General señaló, no obstante, que no se le habían dado las seguridades que solicitó en su carta de 7 de diciembre de 1987 y que, en esas condiciones, era preciso llegar a la conclusión de que había una controversia entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos en lo que respecta a la interpretación y aplicación del Acuerdo relativo a la Sede. En consecuencia, el Secretario General invocó el procedimiento para resolver controversias que figura en la sección 21 del Acuerdo y propuso que la etapa de negociaciones de ese procedimiento se iniciara el 20 de enero de 1988. El Secretario General designó como representante suyo en esas negociaciones al Sr. Carl-August Fleischhauer, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas.

6. A partir del 7 de enero de 1988, se celebraron una serie de consultas en las cuales participaron, para la parte de las Naciones Unidas, el Asesor Jurídico y, para la parte de los Estados Unidos, el Asesor Jurídico del Departamento de Estado, Juez Abraham D. Sofaer, y el Asesor Jurídico de la Misión de los Estados Unidos.

/...

En una oportunidad, el 27 de enero de 1988, la reunión incluyó también, para la parte de los Estados Unidos, un representante del Ministro de Justicia de los Estados Unidos. En esas consultas se informó al Asesor Jurídico de que los Estados Unidos no estaban en condiciones ni estaban dispuestos a participar oficialmente en el procedimiento para resolver controversias previsto en la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede; los Estados Unidos todavía estaban evaluando la situación y no habían llegado aún a la conclusión de que existía una controversia entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos en ese momento porque la ley de que se trataba aún no había sido aplicada. El Poder Ejecutivo estaba examinando la posibilidad de interpretar la ley de conformidad con las obligaciones que incumben a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo relativo a la Sede en lo que respecta a la Misión de Observación de la OLP, tal como se reflejaba en los arreglos existentes respecto de esa Misión, o de lo contrario dar seguridades de que se desecharía el período de 90 días para la entrada en vigor de la ley.

7. El Asesor Jurídico dijo que para las Naciones Unidas se trataba de acatar una disposición del derecho internacional. El Acuerdo relativo a la Sede era un instrumento internacional de carácter vinculante y, en opinión del Secretario General y de la Asamblea General, la ley en cuestión era contraria a las obligaciones que incumbían a los Estados Unidos en virtud de ese instrumento. En la sección 21 del Acuerdo se establecía el procedimiento que se había de seguir en caso de que se produjera una controversia en lo que respecta a su interpretación o aplicación y las Naciones Unidas estaban totalmente decididas a defender los derechos que tenían en virtud de ese Acuerdo. Por lo tanto, insistió en que si no se eximía a la Misión de Observación de la OLP de la aplicación de la ley mencionada, se debía seguir el procedimiento previsto en la sección 21 e iniciar de inmediato deliberaciones técnicas sobre la creación de un tribunal arbitral. Los Estados Unidos aceptaron intervenir en esas deliberaciones pero sólo en forma oficiosa.

8. Las deliberaciones técnicas se iniciaron el 28 de enero de 1988. Se examinaron cuestiones como los costos del arbitraje, la ubicación del tribunal arbitral, su secretaría, idiomas y reglamento, y la forma del compromis entre las dos partes.

9. Sin embargo, cuando resultó evidente que no se progresaba en lo que respecta al fondo de la cuestión, el Secretario General escribió una vez más al Embajador Walters el 2 de febrero de 1988. El Secretario General señaló que, si bien no había recibido una respuesta oficial a su carta de 14 de enero de 1988, se estaban celebrando consultas entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos en diversos niveles. Los Estados Unidos aún estaban evaluando la situación que se plantearía si se aplicara la ley y, hasta tanto terminara esa evaluación, tomaba la posición de que no podía participar en el procedimiento para resolver controversias previsto en la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede. El Secretario General siguió diciendo: "El procedimiento que figura en la sección 21 es el único recurso jurídico de que disponen las Naciones Unidas en esta cuestión y ya que hasta ahora los Estados Unidos no han podido dar las seguridades apropiadas en lo que respecta a la postergación de la aplicación de la ley a la Misión de Observación de la OLP, se está acercando rápidamente el momento en que no tendré otra opción más que participar junto con los Estados Unidos en el procedimiento previsto en la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede o informar a la Asamblea General sobre la

/...

situación de estancamiento que se ha producido". El 4 de febrero de 1988, el Secretario General habló en el mismo sentido en una reunión que mantuvo con el Embajador Walters. Más tarde ese mismo día se informó a las Naciones Unidas de que se comunicaría una decisión al Secretario General a más tardar el 10 de febrero de 1988.

10. El Secretario General se enteró el 10 de febrero de 1988 de que el Gobierno de los Estados Unidos no ha tomado una decisión respecto de la Misión de Observación de la OLP y que no la tomará sino la semana próxima. El Secretario General continuará haciendo todo lo posible para resolver esa controversia o seguir el procedimiento para resolver controversias previsto en el marco de la sección 21 del Acuerdo relativo a la Sede. Sin embargo, habida cuenta de las limitaciones mencionadas en el párrafo 4 supra, las negociaciones entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos han llegado a una etapa en que le es preciso informar a la Asamblea General, de conformidad con la resolución 42/210 B de 17 de diciembre de 1987.

-----